

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS HOY

BERNARDO MABIRE

VISIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

ES AMBIGUA LA ACTITUD DE LOS MEXICANOS frente a Estados Unidos. La marcan rencores originados en las numerosas agresiones que culminaron en el despojo a nuestro país de la mitad de su territorio y le infligieron la humillación de otras intervenciones armadas, incluso en el siglo XX, para no hablar de injerencias del gobierno estadounidense que desviaron —sin ser ataques militares— el curso de la vida mexicana. Enormes diferencias culturales, políticas y de poder económico, nutren antagonismos siempre latentes. Empero, la circunstancia geográfica ha contribuido a que la influencia de Estados Unidos, poderosa en todo el mundo, se ejerza con intensidad excepcional en México, donde se ha consolidado, a la vez, por obra del Estado mexicano. Así, el modelo que escogieron nuestros gobiernos de los años cuarenta, cincuenta y sesenta para la industrialización del país, en consonancia con intereses de grupos privilegiados de la sociedad, plasmó como ideal las formas de consumo norteamericanas que lo inspiraban.

El desarrollo que auspiciaron las políticas gubernamentales y que mantuvo un ritmo acelerado hasta principios de los años setenta, cuando los desequilibrios que también provocó el modelo económico precipitaron una crisis, confirmó afinidades básicas de los círculos oficiales mexicanos con el sistema de producción y ciertos valores estadounidenses, al tiempo que estrechó vínculos —quizá irreversibles— entre los dos vecinos, pese a grandes discrepancias entre los modos de organización de sus economías, que han ido acentuándose en la práctica. Se consolidó así la paradoja de un país subdesarrollado que en el terreno de los símbolos afirma su originalidad, con el propósito de hacer cristalizar su identidad nacional, pero en el plano material se liga cada vez más —en posición dependiente, es decir subordinada— a Estados Unidos.

Por eso, en México, el nacionalismo de la retórica gubernamental, uno de cuyos elementos principales ha sido la xenofobia defensiva, contrasta con la admiración y la simpatía que tienen por Estados Unidos grupos importantes de la sociedad y del gobierno. Es cierto que en los

últimos años las autoridades mexicanas han moderado el tono de su discurso, en comparación con el sexenio anterior, para no ofender a un vecino del que esperan ayuda para superar la crisis nacional. Sin embargo, pese a la cautela y al afán conciliatorio de nuestros medios políticos, las relaciones entre México y Estados Unidos han sido tensas en los cuatro últimos años.

En este periodo, las autoridades norteamericanas han adoptado medidas que, de manera directa o indirecta, lesionan intereses mexicanos. Haya sido éste un fin deliberado o la consecuencia accidental de iniciativas con otros propósitos, se nos causó daño, y el gobierno de nuestro país no dio respuestas prontas a las acciones hostiles, por imposibilidad objetiva o por falta de previsión. Sería igual de fútil preguntar si decisiones norteamericanas en un campo dado persiguen, sin declararlo, objetivos en otro; si, por ejemplo, el bloqueo estadounidense de la frontera “para localizar a un agente antinarcóticos secuestrado”, tenía la finalidad inconfesada de presionar a México para obtener concesiones en materias diferentes de la lucha contra las drogas, es algo que no podría saberse con certeza plena y que no importa, en el fondo, porque no quita la coerción.

EL DETERIORO DE LAS RELACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Para explicar el deterioro de nuestras relaciones con Estados Unidos, conviene señalar cambios en el equilibrio internacional de poderes. Si la correlación de fuerzas pareció favorecer a México respecto a la potencia durante el sexenio de López Portillo, cuando el auge del mercado petrolero aumentó la capacidad de negociación de los estados con reservas considerables del energético, el derrumbe posterior de los precios del petróleo —consecuencia del exceso de oferta mundial— dejó a nuestro país en condiciones de vulnerabilidad extrema. Al desvanecerse la ilusión de prosperidad y fuerza, puso al descubierto, nuevamente, problemas fundamentales de la economía mexicana, ocultos en el breve periodo en que la abundancia fortuita de recursos pareció resolver la crisis. Quedó, además, el legado de una deuda externa gigantesca, contraída de manera irresponsable durante la etapa de bonanza.

En contraste, desde la llegada de Ronald Reagan al poder, Estados Unidos recobró vocación de superpotencia absoluta, más aún a partir de una recuperación económica que ha sido un tanto artificial (porque se ha basado en atraer capitales extranjeros con una política de tasas de interés elevadas, sin que realmente se superen problemas de fondo del aparato productivo), pero no menos eficaz para avivar el patriotismo

conservador, que encontró en Reagan el mejor vocero de una voluntad de grandeza nacional, favorable al uso de la fuerza en política exterior aunque no sea más que por su valor simbólico.

Se invirtió así el proceso mediante el cual México ganó, por un tiempo, cierto terreno para negociar con Estados Unidos, y las diferencias de capacidad entre los dos, más marcadas que nunca, recobraron su claridad hiriente. Hay quien habla, por interés o pudor, de la “interdependencia” de ambos países, para sugerir que mucho de lo que sucede en cada uno repercute en el otro. En favor de esa idea, se menciona la importancia geopolítica de México para Estados Unidos —honor dudoso, porque entraña peligros considerables— y del flujo, hacia el norte, de productos mexicanos como el petróleo, que tienen valor especial para la economía estadounidense; se habla también de factores políticos capaces de mejorar, en principio, la posición de nuestro país, entre ellos el interés norteamericano en que México sea próspero y estable, por razones de seguridad nacional, prestigio internacional e ideología de Estados Unidos. Pero aun si es real cierta influencia recíproca, no cambia relaciones de subordinación que se originan en la profunda desigualdad de poder entre las dos naciones. La industria mexicana no podría subsistir sin la importación de insumos y bienes de capital que fabrica la potencia. Por otra parte, Estados Unidos es el mercado principal para productos, en particular agrícolas, que México le exporta con cierta facilidad, y que resultaría costoso —quizá imposible— vender a otros países. Ni qué decir de la dependencia mexicana en materia de créditos e inversiones, o de la que se manifiesta en la técnica, la ciencia y la cultura de masas en general.

Es tanto más grave el deterioro de la imagen de México en Estados Unidos, origen de la hostilidad que hemos advertido en los últimos años. Por ser tan obvio este sentimiento, hay quienes imaginan una campaña oficial contra nuestro país, planeada desde un centro, visión que tal vez no corresponda a los hechos, porque la fragmentación de la autoridad en el sistema político estadounidense no facilita acciones coordinadas entre varias instancias. La realidad podría ser peor: que la antipatía hacia México esté difundida en numerosos grupos de la sociedad y del gobierno de Estados Unidos, pronta a surgir espontáneamente por cualquier motivo.

Sin duda muchos norteamericanos consideran a nuestro país como un “foco de contaminación”, entre otras razones porque pasa por territorio mexicano buena parte de la droga que se consume en la potencia, hay un flujo migratorio indocumentado de mexicanos que “amenaza la integridad de la cultura nacional y el orden público” en Estados

Unidos, y la política exterior de México parece complaciente con regímenes de izquierda, en vez de contener el "avance del comunismo". Al margen de los motivos directos de fricción entre los dos países, México es, con su crisis nacional, una imagen del subdesarrollo y un recordatorio desagradable de los problemas del Tercer Mundo, que Estados Unidos preferiría no ver.

Hoy son fenómenos mundiales el conservadurismo de los países muy industrializados y su antipatía hacia la causa tercermundista, que en Europa occidental se traducen, por ejemplo, en racismo contra inmigrantes (sobre todo de ex colonias) que en un tiempo contribuyeron con su fuerza de trabajo subpagada a la prosperidad económica, pero ahora inspiran temor y desprecio, pues "han aumentado mucho" o "no pueden asimilarse a la cultura nacional". Confiere carácter distintivo a la derecha en Estados Unidos la agresividad de su impulso militante, que es reacción contra el pensamiento liberal, por cuya influencia grupos ilustrados de la sociedad norteamericana practicaron la autocrítica en los años setenta, bajo el efecto de sentimientos de culpa que les dejó la guerra de Vietnam. Esta postura conllevó la aceptación de que la capacidad económica y política estadounidense no era ilimitada (puesto que habían surgido nuevos centros de poder, con la recuperación de Europa y de Japón y el afianzamiento de China), e influyó en la política exterior de Estados Unidos durante la segunda mitad del decenio pasado, a juzgar por el énfasis del presidente James Carter en el respeto a los derechos humanos y por la disposición de su gobierno a negociar sobre el Canal de Panamá.

Sin embargo, los grupos conservadores de Estados Unidos rechazaron desde el principio el nuevo estilo de diplomacia, más aún cuando tuvieron a su favor el argumento de las humillaciones que sufría su país en el mundo, sobre todo a manos de Irán, atribuidas al reblandecimiento de la posición internacional estadounidense. (México, ensoberbecido en esos tiempos por su riqueza inesperada, no supo obtener provecho de la apertura diplomática del vecino). Los rencores por fracasos de la política exterior fueron extendiéndose en la sociedad norteamericana, con banderas de afirmación nacional que exigió a manera de revancha, desde que llegó Reagan a la presidencia, imponer la voluntad de Estados Unidos en el mundo para conjurar sospechas de decaimiento y revivir épocas añoradas de supremacía indiscutible. Este deseo de poder se justificó a sí mismo con argumentos de superioridad moral, bajo cuya luz los conflictos internacionales se volvieron casi guerras santas. La rigidez ideológica impera nuevamente en el escenario mundial, y el gobierno de Estados Unidos, encerrado en una imagen de prosperidad y fuerza

recobradas, en principio no quiere saber de problemas ajenos ni tolerar la disidencia de países aliados.

POSIBILIDADES DE UNA RELACIÓN ESPECIAL

En vista de las condiciones enumeradas, parece improbable que Estados Unidos otorgue trato preferencial a México. Normalmente, la potencia no ha brindado atención especial a gobiernos que la esperaban, pues sólo considera digno de sí defender sus intereses en el mundo entero, y guiarse por una manera de pensar —con énfasis en la geopolítica— que todo lo subordina a la seguridad norteamericana en su definición más amplia. Una razón adicional por la que Estados Unidos no suele hacer concesiones particulares a un país que las pida —sobre todo a uno subdesarrollado— es el temor de que otros soliciten las mismas. Por supuesto, hay excepciones, pero cuando los norteamericanos deciden otorgar algún privilegio a estados en problemas, puede ser con el objetivo de acentuar diferencias entre quienes se identifican como parte del Tercer Mundo, para dividirlos.

A pesar de ese riesgo y otros, la posibilidad de una relación especial con Estados Unidos ha ejercido fascinación, periódicamente, sobre las autoridades mexicanas, pues hubo un tiempo en que se hizo realidad: el de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sólo un conflicto de esa envergadura mantuvo condiciones de cooperación sistemática entre los dos vecinos, en las que el gobierno estadounidense ofreció a México ventajas a cambio de su colaboración —económica más que militar, necesaria por razones de estrategia— en el esfuerzo bélico. Pasada esta etapa singular, la relación especial fue debilitándose, y a principios de los años setenta Echeverría confirmó que se había desvanecido, cuando Estados Unidos no quiso exceptuar a México de un arancel adicional y general de 10% a las importaciones decretado en agosto de 1971. La desilusión subsecuente fue uno de los motivos principales por los que el gobierno mexicano intentó, en el resto del sexenio, diversificar su política exterior e identificarse con luchas tercermundistas, lo que no implicó descuidar el trato con Estados Unidos: “multilateralismo” y “bilateralismo” son opciones diplomáticas distintas, pero no necesariamente incompatibles.

Resurgió un fantasma de relación especial entre 1977 y 1981, periodo en que la riqueza petrolera de México le valió la distinción de que funcionara una Oficina Coordinadora de Asuntos Mexicanos en el Departamento de Estado; se dispó la magia de nuestro país cuando quedó sumido, ai caer los precios del petróleo, en una nueva etapa de crisis

aguda. No desapareció el interés norteamericano, sino que cambió de orientación: en vez de seguir cortejando al vecino, como cuando era nuevo rico, la potencia le observa ahora con una combinación de impaciencia, desprecio e inquietud, pues teme que repercutan los problemas de México más allá de sus fronteras.

Congruente con su política general, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una posición "dura" frente a nuestro país, en cuanto se muestra reacio a concederle ventajas extraordinarias, para subrayar así que los problemas mexicanos tienen, en lo esencial, causas internas y deben resolverse internamente, si acaso con un poco de auxilio internacional, de preferencia privado. Esta tesis, no desprovista de razón, defrauda la esperanza que debió tener, en el apoyo inmediato de funcionarios estadounidenses, la clase política mexicana, cuya retórica suele atribuir al exterior gran parte de las dificultades del país, por reflejo nacionalista y para encubrir culpas propias o evitar cambios internos. Si la política es el arte de conciliar, podría pensarse en una solución intermedia entre las posiciones de los gobiernos de México y Estados Unidos, en tal forma que el primero se contentara con recibir, sobre todo, ayuda oficial indirecta norteamericana (por ejemplo, más respaldo al negociar con acreedores privados), y el segundo estuviera mejor dispuesto a brindar esa cooperación, con tolerancia y empatía hacia el vecino, luego de admitir que factores internacionales ciertamente agravan la crisis mexicana en terrenos como el de las finanzas.

LA DEUDA EXTERNA MEXICANA

En México, buena parte de la opinión ilustrada dirige hacia Estados Unidos su rencor por el tremendo peso de la deuda pública externa sobre la economía nacional, y también espera de él concesiones que alivien rápidamente la situación. Para saber cuánto apoyo cabría solicitar al poder público estadounidense, conviene tener presentes dos hechos fundamentales que se olvidan con demasiada facilidad. El primero es la diferencia entre el gobierno y los bancos privados de Estados Unidos, entidades que persiguen, con independencia, objetivos particulares. Sólo en condiciones extraordinarias podría esperarse que la autoridad política impusiera súbitamente, a los banqueros, decisiones drásticas relativas a deudores del Tercer Mundo. El margen de autonomía de los bancos privados norteamericanos, cuya participación en la deuda mexicana ha venido aumentando desde hace más de un decenio, se ha expresado, en los últimos años, en resistencia a otorgar más créditos a nuestro país; han terminado esos bancos por concederlos, para evitarse

problemas mayores, pero dejaron constancia de su falta de entusiasmo, que retrasó eficazmente el flujo de recursos, pese a que la Reserva Federal estadounidense reiteró su apoyo a México, además de que el Fondo Monetario Internacional aprobó créditos adicionales. Por otra parte, los gobiernos mexicanos rara vez han querido recibir fondos de asistencia oficial directa de Estados Unidos. Tampoco habría razón, en la actualidad, para esperar apoyo considerable de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (donde la potencia, que aporta la mayoría de los recursos, parece empeñada en distribuirlos según sus criterios políticos).

El segundo hecho que suele olvidarse —y contradice la esperanza de aliviar la carga de la deuda externa mexicana a base de negociar con Estados Unidos exclusivamente— es que no todos los acreedores —menos de la mitad— son estadounidenses: europeos y japoneses han aumentado su participación. Se rumora que estos últimos, sobre todo, son muy intransigentes en las negociaciones. Estados Unidos tendría capacidad de ejercer alguna presión sobre sus aliados para que suavizaran su actitud. Podría ocurrir así en la práctica, pero también que todos estos países aprovecharan su diversidad y se encubrieran unos a otros, con el objeto de no hacer concesiones en bloque.

Si consideramos la poca simpatía de los banqueros y añadimos, a los factores objetivos por los que no bastaría el apoyo gubernamental norteamericano para resolver nuestro problema de endeudamiento, la falta de consenso en el medio político de Estados Unidos para brindarnos auxilio (porque se oponen los elementos más conservadores, con el objeto de mostrar antipatía e incluso presionar al vecino en crisis), no sorprenderá que sean tan limitados los progresos en la materia: son pocos y modestos, pues las ventajas que los funcionarios de México dicen haber obtenido, en los últimos meses, al negociar la deuda —que nunca han explicado con detalle a la opinión pública— no justificarían mantener la política de austeridad.

El gobierno mexicano, para respetar compromisos internacionales, aceptó el riesgo de sumir la economía en la recesión, tanto así teme las represalias que provocaría una suspensión de pagos. Mientras, por convicción o miedo, continúe el celo heroico de complacer a la comunidad financiera mundial, y no se llegue a la insolvencia que obligue a buscar un eufemismo elegante para moratoria, México debe insistir en que quienes le prestaron demasiado comparten responsabilidad en el endeudamiento excesivo, y negociar concesiones verdaderas basadas en ese principio (redimir parte de la deuda en moneda nacional y obtener colaboración de los acreedores en actividades que se orienten hacia la

exportación), pues no habrá manera de pagar mientras no se recupere la economía y produzca más bienes que se exporten. Algunos especialistas proponen que los bancos extranjeros reciban del gobierno mexicano un activo en pesos que se destinaría a crear, en México, empresas con posibilidad de exportar mucho de su producción. Nuestro país dejaría de recibir créditos externos (lo que implicaría reducir el gasto público), pero los compensaría con ganancias por concepto de exportaciones adicionales. En esa forma, además de romperse el círculo vicioso del endeudamiento, disminuiría el riesgo de que México se viera, contra su voluntad, en la imposibilidad absoluta de pagar.

Sería deseable que las nuevas empresas exportadoras se vincularan estrechamente con el resto de la economía mexicana, para ser algo más que simples maquiladoras. Estas últimas han proliferado en años recientes, hasta convertirse en una de las fuentes principales de divisas del país; se dice que explotan mano de obra barata en condiciones que infringen la legislación laboral; más aún, las de capital asiático suelen aprovechar cuotas de exportación que nos corresponden en el mercado estadounidense, pero que no cubre la industria de México; en general, son compañías dispuestas a llenar el vacío que creó la ineficiencia de los industriales mexicanos, más dedicados a especular que a invertir. Sin embargo, pese a que las maquiladoras simbolizan un fracaso nacional, humillante para un país que en sus mejores tiempos rechazó papeles subordinados en la economía internacional, resuelven problemas a corto plazo y el gobierno mexicano las acepta; con más razón podría éste permitir el funcionamiento —dentro de los límites que marcan las leyes— de empresas exportadoras mejor integradas al aparato productivo. Establecerlas con apoyo de los acreedores, según el esquema que permitiría pagar parte de la deuda en moneda nacional, parece preferible a seguir esperando la inversión privada extranjera “normal”, que recomienda el gobierno estadounidense como alternativa a los préstamos bancarios y a la asistencia oficial de países ricos.

Esa inversión aumentó en México a partir de los años cuarenta, pese a la desconfianza de algunos funcionarios y no pocos empresarios; como no fue solución mágica para los problemas nacionales, Echeverría intentó controlarla —impulsado por su prédica reformista— mediante nuevas leyes que no pudieron aplicarse cuando el estallido de la crisis obligó a buscar en el exterior, sin discriminación, todos los recursos posibles. El repunte de problemas económicos, después del interludio de prosperidad, dio lugar a que las autoridades mexicanas hicieran nuevos llamados a la inversión extranjera, con promesas de facilidades y garantías. Ha llegado muy poca, inferior a la esperada e incapaz de compensar

la fuga de capitales. Son tanto más necesarias concesiones reales que aligeren el peso de la deuda; hacen falta, al respecto, apoyos del gobierno estadounidense, no porque esté en condiciones de imponer cualquier decisión a los bancos privados de su país y de otros, sino porque al sancionar formas de pago novedosas presionaría a la comunidad internacional para aceptarlas. Conviene a México insistir en que, si no recibe más colaboración externa, solamente le quedará el camino de la moratoria, pese a todo cuanto ha hecho por evitarla, porque nuevos créditos —cada vez más difíciles de conseguir, en condiciones poco favorables— apenas aportan alivio pasajero.

EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO

Al margen de que se busque colaboración de los acreedores para alentar las exportaciones, nuestro país debería, por su cuenta y sin más demora, en materia de comercio con Estados Unidos, redoblar esfuerzos con el objeto de aumentar las ventas de bienes que hoy se exportan a la potencia, abrir ahí mercado para otros que se producen ya en abundancia e iniciar o desarrollar la producción de otros más que pudieran venderse. Los pesimistas dirán, en este punto, que el proteccionismo constituye un obstáculo infranqueable; mencionarán la presión constante de los sindicatos en Estados Unidos para limitar las importaciones, a la cual se añade la actitud de autoridades públicas norteamericanas que han amenazado a nuestro país con restricciones comerciales (e incluso las han impuesto), como parte de una política general frente al mundo o como estrategia particular hacia México, motivada por interés económico o por el de ejercer presión en otros campos.

No son de extrañar impulsos proteccionistas latentes en un país que, si bien tiene reservas inmensas de poder, se ha rezagado en varios campos de la producción, frente al gran dinamismo de naciones como Japón. Tampoco debe sorprender que a veces tenga victorias el proteccionismo —cuando impone barreras arancelarias y de otros tipos— en el campo de batalla de los foros legislativos, donde un país extranjero suele tener pocas probabilidades de hacer triunfar su interés sobre el de grupos nacionales, a menos que entable alianzas con algunos de ellos contra los demás, en conflictos locales. Es un hecho también que Estados Unidos utiliza —y otras veces amenaza usar— la política comercial como instrumento de presión o castigo: a principios de este año, a raíz de propuestas de legisladores (que no prosperaron pero causaron alarma), se perfiló el riesgo de que el vecino nos excluyera de su sistema de preferencias y aumentara los impuestos a nuestras exportaciones, en re-

presalia por “lo insuficiente” de la colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, aunque en Estados Unidos hay y habrá siempre amagos de proteccionismo y de restricciones de otros tipos a las importaciones, nada indica que se hayan generalizado o convertido en amplias medidas concretas, ni que de inmediato vayan a imprimir su sello en la vida económica estadounidense, ni que por su causa no aumenten o disminuyan las exportaciones mexicanas hacia el norte. La verdad, por ahora, es que México no cubre buena parte de las cuotas que tiene asignadas en el mercado de la potencia, que desaprovecha oportunidades de exportar por desconocer la demanda norteamericana, y que a menudo no consigue aumentar las ventas de sus productos, sobre todo manufacturadas, porque no son competitivos.

Por otra parte, nuestro país no está indefenso en la lucha comercial. Le abre posibilidades de acción su pertenencia al GATT, que no es buena ni mala en sí, ni conduce de manera automática a resultados predecibles, sino que brinda la oportunidad de utilizar mecanismos de negociación que recompensan la habilidad de quien sepa utilizarlos, ya sea para diversificar su comercio o para mejorar su relación con clientes privilegiados. No habrá, empero, eficacia diplomática que baste mientras México no eleve la calidad de sus productos para que puedan competir en el mercado internacional con los de otros países empeñados, desde hace tiempo, en fomentar sus exportaciones.

Queda por saber quién es responsable de cuidar la eficiencia de la planta productiva mexicana. El gobierno actual ha suscrito, en parte, la filosofía de disminuir la participación del Estado en la vida económica para dejar campo libre a la iniciativa privada, pero ésta no se distingue, en la práctica, por el dinamismo que le atribuyen sus defensores. De hecho, los empresarios mexicanos nunca habrían adquirido el poder que despliegan hoy sin las políticas gubernamentales de proteccionismo e incentivos diversos. Con un mercado cautivo y condiciones favorables garantizadas, los hombres de negocios no conocieron presión para ser más emprendedores, perfeccionar sus métodos de trabajo o patrocinar investigaciones que permitieran desarrollar técnicas novedosas; menos razón tendrían ahora —si antes no adquirieron espíritu empresarial— para correr los riesgos inherentes a las inversiones capaces de estimular la producción, cuando las reglas del juego les permiten amasar grandes fortunas especulando con divisas y de otras maneras, en perjuicio de la economía nacional tan decaída.

El Estado se abstiene de intervenir como productor, porque no se considera capaz de adoptar ese papel (y quizá tenga razón), pero la ini-

ciativa privada no llena vacíos inmensos en la actividad económica. Otro aspecto de la paradoja es que, si bien los empresarios rechazan la injerencia del gobierno en áreas que reclaman como suyas, y celebran, en principio, que la autoridad política tienda a replegarse, no aceptan dejar de recibir protección, guía y apoyos estatales, sino que los esperan en materias como el comercio. Parece que aquellos productores dispuestos a colaborar en el esfuerzo por aumentar las exportaciones, desean que la clase política les allane el camino, abriendo mercados y negociando condiciones especiales con gobiernos extranjeros. Pero si cambian las normas para ampliar el terreno de los grupos privados, éstos deberían tomar la iniciativa de explorar por sí mismos las condiciones internacionales y vigilar la calidad de los bienes que producen, pues no habrá otra forma de aumentar las ventas al exterior; si se aplicara plenamente el sistema liberal (a condición de que reaccionaran los empresarios y lo apoyaran), sólo correspondería al poder público, cuando más, una función auxiliar de asesoría a los exportadores.

Como vivimos una etapa que aspira a ser de transición, es normal que provoque ambigüedad respecto a la distribución de funciones entre el Estado y los dueños de empresas, que se resolverá en el campo de la política nacional. En el de la internacional habrá que negociar sobre otros problemas entre México y Estados Unidos.

PROBLEMAS FRONTERIZOS MENORES Y MIGRACIÓN

Se diría que están superados los conflictos de nuestro país con su vecino del norte por cuestiones territoriales, y que propuestas aisladas, publicadas en la prensa norteamericana, de que México entregue Baja California en pago de la deuda, son fantasías anacrónicas. Si quedan gérmenes de antagonismo en este plano, estallará la tensión a propósito de fideicomisos que otorgó el gobierno de México a ciudadanos de Estados Unidos, por tiempo limitado, a lo largo de la frontera y en las costas. Cuando termine el plazo de estas concesiones, fruto de mucha largueza o muy poca reflexión de las autoridades mexicanas en los años setenta, sus beneficiarios tal vez presenten resistencia a desprenderse de los que consideren derechos adquiridos, y esto desemboque en una crisis diplomática.

Los acuerdos sobre el río Colorado apaciguaron fricciones de larga historia entre México y Estados Unidos, que podrían repuntar, sin embargo, debido a la contaminación de un pequeño ramal; hoy día, los principales conflictos latentes respecto a recursos naturales en la zona fronteriza, tienen que ver, más bien, con las aguas subterráneas. Perte-

necen al pasado las incursiones, en nuestro territorio, de poblaciones nómadas y aventureros de Estados Unidos. En cambio, la migración de trabajadores mexicanos "ilegales" hacia el norte se ha vuelto motivo de tensión en las relaciones entre México y su vecino.

Este movimiento se ha registrado, con fluctuaciones, a lo largo de nuestro siglo —para no hablar de antecedentes lejanos— en forma paralela o alternativa a un flujo migratorio legal que tuvo su apogeo a partir de la Segunda Guerra, cuando la gran necesidad de mano de obra en Estados Unidos permitió a México celebrar, en condiciones favorables, un convenio de braceros que le fue provechoso en su momento y se renovó varias veces. La vuelta a condiciones normales en el mercado de trabajo estadounidense privó al gobierno mexicano de su ventaja para negociar, pero nuestro país quiso mantener acuerdos de este tipo e insistió en renovarlos —aun después de la negativa de la potencia, en 1964— hasta que el presidente Echeverría abandonó el empeño, en 1974, por considerar que los convenios podían ser nocivos para México. Al margen de la negociación diplomática, la costumbre establecida y las expectativas de encontrar trabajo en Estados Unidos siguieron alentando migración, ilegal en su mayor parte, que durante varios años toleraron las autoridades públicas norteamericanas, en provecho de algunos empresarios; luego fueron combatiéndola, cada vez con mayor energía en el decenio pasado, conforme cambiaron el ambiente general y el equilibrio de fuerzas políticas e intereses económicos en Estados Unidos.

El repudio en aumento a la inmigración, sobre todo la de indocumentados y la que proviene de América Latina y Asia, culminó con la aprobación, en el Congreso norteamericano, el 17 de octubre de 1986, de la ley Simpson-Rodino, que firmó el presidente Reagan a principios de noviembre. Ésta dispone multas a cualquier patrón que contrate empleados sin investigar, revisando ciertos documentos, si están autorizados para trabajar, y a todo aquel que dé empleo, a sabiendas, a extranjeros sin autorización. Por otra parte, la Simpson-Rodino prevé que se legalice la situación de quienes demuestren haber vivido en Estados Unidos, de manera continua, desde el 1 de enero de 1982, o desempeñado labores agrícolas por un mínimo de noventa días durante el periodo que abarca del 1 de mayo de 1985 al 30 de abril de 1986.

En nuestro país, muchos suponen que un afán deliberado de agredir a México impulsó la nueva ley; tal vez sea más adecuado interpretarla como expresión de xenofobia dirigida a las poblaciones de lugares subdesarrollados en general, no a los mexicanos en exclusividad. Se olvida que llegan a la superpotencia inmigrantes de todo el mundo. El gobierno estadounidense recibe mejor a los que provienen de países con

regímenes de izquierda, porque al darles refugio puede utilizarlos en campañas oficiales de propaganda anticomunista, si bien hay excepciones importantes, como la de los cubanos embarcados en Mariel en 1980, muchos de ellos criminales comunes o enfermos mentales que, al causar estragos en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, fomentaron miedo a los extranjeros en una sociedad proclive, de suyo, al conservadurismo y por ende al racismo. Ni qué decir de las personas que, para escapar de sistemas derechistas violentos, piden asilo en Estados Unidos: generalmente se les niega, porque no se acepta —aun si es verdad— su argumento de que padecen persecución política, sino que se atribuye finalidad económica a su deseo de emigrar.

Sin embargo, aunque el flujo de trabajadores “ilegales” mexicanos tiene carácter de fenómeno constante que lo hace menos espectacular, ha estimulado en forma especial la preocupación de Estados Unidos por recuperar control sobre sus fronteras: la promulgación de la Simpson-Rodino simboliza una reafirmación de la soberanía nacional estadounidense, por encima de los intereses particulares de quienes explotan mano de obra extranjera. Este significado de la ley, que de momento es sobre todo metafórico (y tal vez lo sea siempre, en lo fundamental, debido a grandes dificultades para poner en práctica las disposiciones legales y asegurar su eficacia), debería preocupar, al menos por ahora, mucho más que los efectos concretos previsibles de las nuevas normas sobre nuestro país, que quizá resulten menos adversos de lo que se teme. Por supuesto, México padecería más que otros estados la aplicación rigurosa de la Simpson-Rodino, pero no conviene exagerar la probabilidad de ese cumplimiento estricto ni la magnitud de sus consecuencias.

Preocupa a muchos mexicanos que la nueva ley provoque deportaciones masivas, tanto más temidas cuanto se da por hecho que ahondarían la peor crisis nacional en varios decenios. Se inquietan, sobre todo, quienes piensan que la corriente migratoria es indispensable para mantener la estabilidad de México. Pero aunque las funciones de “válvula de escape” de la emigración parezcan muy necesarias, a primera vista, en una economía con mucho desempleo, quizá no lo sean tanto si en realidad —como ha demostrado la investigación empírica— los “ilegales” en territorio norteamericano son menos numerosos y envían a México menos dinero de lo que afirman voces alarmistas, que sobrestiman también la capacidad estadounidense para poner en práctica la ley.

Según los especialistas, las deportaciones que pudiera haber tendrían su mayor efecto en la zona fronteriza, que debería prepararse para facilitar el retorno de mexicanos repatriados, a base de crear puestos de auxilio en esa franja, donde servicios de orientación y ayuda reemplaza-

ran las prácticas tradicionales de asedio brutal y despojo que padecen, a manos de autoridades de su país, los trabajadores que vuelven a México. Crear estos mecanismos y asegurar su funcionamiento, pondrá a prueba la capacidad de los funcionarios de alto rango para hacerse obedecer en los niveles medio e inferior del aparato del Estado. Urge también que México refuerce sus servicios de protección consular en Estados Unidos.

No sería la primera vez que aumentara el movimiento migratorio de regreso: en otras épocas, los norteamericanos lanzaron intensas campañas de expulsión de "ilegales". Ocurrió así a principios de los años treinta, pero el genio político transformó las circunstancias humillantes en programa patriótico de reintegración de mexicanos a su país, que logró hallarles sitio en la vida nacional brindándoles ocupación, no obstante los problemas económicos del periodo. Con la tranquilidad que infunden este precedente y otros, México podría aplicar, en forma preventiva, las medidas de apoyo a repatriados, y observar el proceso mediante el cual entrará en vigor, gradualmente, la Simpson-Rodino. Tardarán en aplicarse sus disposiciones, de acuerdo con un calendario que tal vez no pueda respetarse —pese a que prevé plazos largos para cumplir, en varias etapas, requisitos muy diversos— por insuficiencia de recursos humanos; falta todavía que las autoridades judiciales interpreten la nueva ley y después la ponga en práctica el Ejecutivo, camino tortuoso en el que habrá demoras y derivaciones imprevistas, como es propio de un sistema político donde la separación real de tres poderes permite que se equilibren entre sí.

Más aún, los especialistas dudan que sea eficaz un sistema nacional de multas a los patrones, pues tiene antecedentes fallidos —desde principios del decenio pasado— en 11 entidades de la federación, que promulgaron leyes para sancionar a quienes dieran trabajo a "ilegales"; éstas fracasaron debido a enormes dificultades para demostrar la responsabilidad de los empleadores en casos de infracción. Por otra parte, es probable que no funcione el sistema de investigar la condición migratoria de los trabajadores revisando algunos de sus documentos, como licencias para manejar y tarjetas de seguridad social: puede obtenerlos legalmente cualquier persona en Estados Unidos con tal facilidad que no prueban gran cosa.

Obstáculos tan considerables auguran que la Simpson-Rodino tendrá, en México, a corto plazo, efectos menos adversos de los que muchos creen. Es tanto más razonable preocuparse ahora, sobre todo, por lo que simboliza la ley: voluntad, en Estados Unidos, de cerrarse al mundo subdesarrollado en apuros, surgida de indiferencia que mati-

zan temor y desprecio. Por otra parte, si bien estos sentimientos negativos no se dirigen sólo a nuestro país, debería inquietarnos que los altamente un estereotipo muy poco halagador de los "ilegales" mexicanos. Nos atrae hostilidad el hecho que la opinión pública norteamericana vea en estos trabajadores una carga para el erario nacional y una amenaza a la cultura de Estados Unidos, o que les considere competidores desleales en el mercado laboral, llegados a quitar empleos a ciudadanos. Peor aún es que se atribuya a los inmigrantes —con tan poca base como los prejuicios anteriores— el aumento de la criminalidad, y que se les vincule, en particular, con el narcotráfico, asunto que ha envenenado las relaciones entre México y Estados Unidos.

EL NARCOTRÁFICO

La magnitud del conflicto por este motivo ciertamente guarda proporción con los daños que causa, en la sociedad norteamericana, un consumo de drogas generalizado: graves problemas de salud pública, pérdidas económicas inmensas y un decaimiento paulatino del ánimo colectivo. Factores internos, culturales y sociales —como el deterioro de la organización familiar, la soledad aparejada al individualismo o la tensión que origina la necesidad de competir— serían la causa fundamental de la drogadicción en aumento entre norteamericanos de todas las clases. Sin embargo, nuestro vecino a duras penas admite las raíces locales de su problema, en tanto que le resulta fácil encauzar rencores hacia México, en cuyo territorio se produce parte de la droga para consumo de la potencia, y por donde pasa, camino al norte, mucha más que proviene de otros lugares.

Tenía que elevarse la producción mexicana, en virtud de las leyes del mercado, cuando la gran demanda estadounidense elevó el precio de los narcóticos hasta niveles incomparablemente superiores a los de cualquier otro cultivo. También era de prever que aumentara el narcotráfico internacional hacia Estados Unidos por su frontera del sur, pues la vigilancia redoblada en las costas norteamericanas cerró vías de acceso favoritas de las mafias. Estas circunstancias, que escapan a nuestro control, no atenúan los efectos políticos muy negativos de ese tráfico ilícito, por cuya causa México tuvo su peor fricción con Estados Unidos en varios años.

El secuestro en Guadalajara, el 7 de febrero de 1985, de Enrique Camarena Salazar, agente antinarcóticos estadounidense, desató una crisis que culminó, nueve días después, con la decisión norteamericana de realizar "inspecciones extraordinarias" en los puestos fronterizos para

“localizar a Camarena”. La llamada “operación interceptación”, que provocó graves trastornos en nuestro país y le enseñó su vulnerabilidad, fue medida humillante a la que muchos periodistas e intelectuales atribuyeron objetivos no relacionados con el narcotráfico, sobre todo el de inducir cambios en la política de México hacia Centroamérica. Tenga base o no esa conjetura, lo cierto es que la presión se alimentó de declaraciones del embajador Gavin, así como de informes en la prensa y la televisión de Estados Unidos, que destacaron la lentitud de las investigaciones policíacas mexicanas y denunciaron, con escándalo, actos de connivencia entre autoridades y narcotraficantes.

El bloqueo de la frontera no duró muchos días. Sin embargo, quedó muy lesionado el prestigio de la élite política mexicana, porque el público estadounidense no diferencia niveles del aparato estatal en nuestro país, y por ende no disocia a funcionarios superiores honorables de policías corruptos. Haría más justicia al sistema político de México reconocer que los estratos de mayor jerarquía en el gobierno, al conservar autoridad legítima de última instancia, ejercen cierto control sobre fuerzas violentas y destructoras, dentro y fuera del Estado, que se desbordarían de otra manera; no es poco mérito, en tiempos de crisis aguda, mantener cerrada la caja de Pandora.

Además del deterioro de su imagen frente al exterior, las autoridades de alto nivel pagan costos políticos en México, a medida que su necesidad de recurrir cada vez más al ejército, para combatir el narcotráfico, altera el equilibrio de fuerzas en detrimento de los civiles. Si continúa esa lucha, conviene seguir librándola en coordinación con Estados Unidos, para hacerla más eficaz, pero sin perder la dirección de la empresa ni delegar atribuciones exclusivas de la soberanía, y subrayando que México hace una amable concesión al permitir la presencia de agentes norteamericanos en su territorio; más aún, sería bueno, en campañas contra la distribución de drogas, recibir apoyo internacional —por ejemplo, de las Naciones Unidas— para subrayar el carácter mundial del problema que se combate y limitar el papel de los militares mexicanos. Por otra parte, nuestro país debería divulgar más su esfuerzo en Estados Unidos y pedir que se castigue ahí con energía el consumo de narcóticos, pues no cesará la producción mientras continúe la demanda. Con medidas vigorosas en estas direcciones, el gobierno de México se defenderá de culpas que le atribuyen injustamente; más difícil le será librarse de la antipatía estadounidense que le atrae su política exterior, en particular hacia América Central.

LA POLÍTICA MEXICANA HACIA AMÉRICA CENTRAL

La estrategia de Estados Unidos respecto a Nicaragua consiste en patrocinar grupos que combaten al gobierno sandinista, a manera de practicar el mayor hostigamiento posible sin llegar al extremo de una invasión militar directa, que probablemente no apoyaría la sociedad norteamericana. Esta línea de acción es congruente con el espíritu y los principios generales de la política exterior estadounidense, que ha enarbolado banderas de anticomunismo militante al adoptar posiciones de fuerza, empeñada en simbolizar la grandeza nacional. Asediar a los nicaragüenses también satisface un capricho personal del presidente Reagan y le sirve para tranquilizar a sus partidarios más conservadores, que pudieran alarmarse con medidas conciliatorias esporádicas de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. En contraste, México se niega a interpretar los acontecimientos en Nicaragua desde la perspectiva del conflicto Este-Oeste, critica la intervención de una gran potencia en un país de pocos recursos y propone la negociación para solucionar conflictos.

Los críticos de la política exterior mexicana señalan, no sin razón, que se ha concentrado demasiado en América Central y que le ha faltado sutileza para comprender conflictos e intereses locales de los estados del área, a los que ha querido imponer soluciones en vez de respetar su capacidad de negociación autónoma (aun cuando el Grupo Contadora, por ser esfuerzo internacional, significó avance respecto a la militancia "bilateralista" de México en épocas anteriores). Advierten los críticos, a la vez, la falta de resultados tangibles de esa política, y hacen notar que no se ven siquiera signos de reciprocidad nicaragüense. Podría uno sospechar, incluso, que la situación actual beneficia al gobierno de Reagan (que despliega agresividad en prueba de conservadurismo) tanto como al de los sandinistas (que tienen buen pretexto para seguir concentrando poder en sus manos a costa del pluralismo político en Nicaragua).

Empero, México no podría dar marcha atrás, si ha comprometido en una causa la dignidad nacional, y además le sobran motivos prácticos para seguir repudiando la política norteamericana en América Central: un país que sufrió la ocupación de un puerto y el acecho de la flota estadounidense, en pleno siglo XX, no puede menos que rechazar el uso de la fuerza en política internacional, por dignidad y para resguardarse de más intervenciones, ya que Estados Unidos no pierde su impulso de inmiscuirse —cuando se lo dictan "intereses de seguridad"— en la vida política de otras naciones, utilizando medios que violan el derecho norteamericano y el internacional.

Tiene precedentes el apoyo de México a “causas progresistas”, en especial la política de respaldo al gobierno de Castro, que aprendieron a tolerar los norteamericanos. Éstos notaban, sin duda, en los años sesenta, cierta incongruencia entre las políticas interna y exterior de México, y conocían también la vulnerabilidad de nuestro país (sobre todo porque la planta industrial mexicana dependía del exterior), pero le permitieron ampliar sus márgenes de negociación a base de ejercer autonomía en el manejo de su diplomacia, cuyo simbolismo legitimaba un sistema político capaz de asegurar estabilidad social y crecimiento económico superior al promedio. Los frutos del “milagro mexicano” eran compatibles con el interés de Estados Unidos, y México no perdió ocasión de alternar su disidencia, en materia de política internacional, con reiteraciones explícitas de afinidad fundamental con el sistema económico y político estadounidense.

Han cambiado mucho las condiciones: en la actualidad es menos probable la tolerancia norteamericana, porque México pasa por una crisis aguda mientras Estados Unidos sólo piensa en afirmar su poder. Además, la geografía hace pensar, a ideólogos conservadores obsesionados por el temor a una “segunda Cuba” en Nicaragua, que la agitación en América Central forma parte de una gran campaña comunista cuyo objetivo, a largo plazo, es conquistar México para minar luego, desde ahí, las bases de la economía y la sociedad norteamericanas, lo que endurece por partida doble la posición de Estados Unidos.

En condiciones tan desfavorables, nuestro país no tiene otra opción que seguir propugnando —firme, pero sin excesos retóricos para evitar fricciones innecesarias— la negociación como medio de resolver conflictos. Con gran habilidad diplomática, no sería imposible convencer a Estados Unidos de que apoye esa alternativa. La potencia afirma que no habría modo de verificar el cumplimiento de obligaciones que contrajeran los sandinistas al suscribir un acuerdo de paz. Se puede responder a este argumento que, una vez negociado el arreglo, la presión de la opinión pública mundial inhibiría abusos del régimen nicaragüense, y en caso de que los hubiera se le aplicarían sanciones acordadas de antemano, con apoyo de la comunidad internacional, más benéficas para el interés de Estados Unidos que acciones ilegales de sus funcionarios. México debería difundir esta idea entre el público norteamericano, en busca de respaldo, y explicarle su posición ante América Central, así como la lógica de sus votaciones en organismos internacionales —algunas muy congruentes con objetivos mexicanos, otras no tanto— que mucho irritan al gobierno de la potencia.

PROBLEMAS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

En el trasfondo de los conflictos entre México y su vecino, a propósito de asuntos internacionales y otros, se perfilan problemas de legitimidad y estabilidad de nuestro sistema político. No sólo aumentó, en años recientes, el vigor de la oposición interna (sobre todo de derecha), sino que medios de comunicación y círculos oficiales en Estados Unidos han criticado al gobierno mexicano por prácticas que se apartan del ideal anglosajón de democracia, en especial las relativas al manejo de elecciones estatales, y lo han presionado para aplicar medidas que debilitan los cimientos del Estado. No son nuevos el autoritarismo del sistema, ni sus debilidades electorales, ni otros pecados que contribuyen a mantenerlo en pie; han estado presentes desde hace mucho tiempo y no importaron gran cosa al público estadounidense mientras hubo en México prosperidad material. En cambio, ahora que es tiempo de crisis y que la élite política mexicana parece perder control sobre los acontecimientos nacionales (en parte por haberse replegado voluntariamente, de acuerdo con un esquema liberal, y en parte porque no logra ya controlar grupos que le brindan apoyo, o no ha sabido abrir canales para que se expresen fuerzas nuevas), los defectos del sistema salen todos, de pronto, a la luz, se agigantan y se vuelven imperdonables.

De ahí el riesgo de que Estados Unidos, por dudar de la fuerza de la clase en el poder, busque interlocutores en la oposición y brinde apoyo, con su mal juicio habitual, a grupos de derecha radicales que provoquen agitación en México por diversos medios, incluso violentos. El peligro es tanto mayor cuanto que el gobierno estadounidense considera propio de la práctica diplomática, en todo momento, entablar diálogo con organizaciones privadas de países extranjeros, al margen de cualquier canal oficial, y emitir juicios francos sobre asuntos internos de los mismos.

Como las autoridades mexicanas no podrán cambiar prácticas tan arraigadas, sólo les queda mejorar su imagen internacional mediante reformas internas que encaucen la oposición, y a base de habilidad diplomática y propaganda que subraye una virtud innegable del sistema político: su capacidad para mantener, con poca represión, estabilidad excepcional (lo más conveniente para Estados Unidos) en un país que puede caer en la violencia. Si ésta llegara a desbordarse y a romper el equilibrio actual, cada vez más precario, no habría razón para esperar que engendrarse una sociedad más justa o democrática.